



# 68th IFLA Council and General Conference

## August 18-24, 2002

---

**Code Number:** 110-129-S  
**Division Number:** V  
**Professional Group:** Government Information and Official Publications  
**Joint Meeting with:** -  
**Meeting Number:** 129  
**Simultaneous Interpretation:** Yes

### **Un vistazo a los cambios en las políticas de información gubernamental después del 11 de Septiembre**

**Edward T. Hart**

Bibliotecario de Documentos Gubernamentales / Adquisiciones  
New England School of Law  
Boston, Massachussets, Estados Unidos

---

#### **Introducción**

En el período que siguió al 11 de septiembre, los gobiernos alrededor del mundo han vuelto a estudiar sus medidas de protección en contra de los seguidores de Osama Bin Laden y las actividades de su campaña anti-americana. ¿Si los aviones civiles fueron utilizados como misiles, qué otro instrumento de la vida cotidiana podrá ser utilizado para la destrucción? Por lo tanto, muchos gobiernos han lanzado campañas para combatir este nuevo nivel de terrorismo.

Uno de los puntos críticos en las campañas gubernamentales en contra del terrorismo es la administración y manejo de información. Esta información es producida tanto por el gobierno como por el sector privado y el gobierno considera que podrá ser de utilidad en la lucha contra el terrorismo. Los gobiernos están revisando sus políticas de información en lo que concierne a su acceso y privacidad. Las políticas de algunos países han sido directamente influenciadas por los sucesos del 11 de septiembre y han cambiado para cumplir con las percepciones de la demanda de combatir al terrorismo. Existen dos muy importantes áreas de las políticas de información que han cambiado en muchos países: acceso a la información, ya sea producida por el gobierno o no, y la privacidad del

gobierno en la intrusión a la información personal. Nos enfocaremos al acceso a la información. Jugando un rol crítico en la implementación de estas medidas están los especialistas en información y los bibliotecarios, a los cuales se les han dado órdenes de negar información a sus usuarios, a la vez que han sido forzados a entregar información por mucho tiempo concebida como confidencial.

## **El Acceso a la Información**

Muchos países han tenido una larga tradición de proveer el acceso a la información a través de publicaciones regulares así como de estatutos de libertad pública para usar información. Tales prácticas son una muestra de un gobierno democrático que provee una forma para que las personas revisen las acciones de su gobierno. Estas medidas siempre han sido limitadas bajo las restricciones de “seguridad nacional” y privacidad, pero a los hechos seguidos del 11 de septiembre, los países han adoptado nuevas limitantes en cuanto a la información gubernamental. Las agencias gubernamentales declaran que un nuevo parámetro de análisis es necesario, ya que existe información impresa que podría apoyar los esfuerzos de los terroristas. Este documento observará las consideraciones y los cambios con respecto a la información gubernamental hecha por un número de países después del 11 de septiembre. También analizaremos algunos ejemplos de cómo el gobierno busca controlar la información del sector privado, comercial y no lucrativo, en nombre de la seguridad o con el fin de prevenir “crímenes de odio” en contra de minorías de la población amenazadas.

El gobierno de los Estados Unidos ha tenido un historial de ser uno de los gobiernos más abiertos del mundo, con sus diversos programas de distribución de información gubernamental y sus leyes de libertad de información (Freedom of Information Acts, FOIA). Históricamente, la información gubernamental es distribuida a través del Programa Federal de Bibliotecas Depositarias, pero recientemente el uso de Internet ha provisto un aumento de accesos directos del público a las fuentes de información de las agencias. Las FOIA requieren a las agencias Federales el proveer respuestas a individuos que requieren información en poder de las agencias o proveer una causa legal por no dar las respuestas. Estas leyes casi ponen a las agencias en la defensiva cuando se les solicita información. Ahora nos enfocaremos en la información publicada por el gobierno de los Estados Unidos, ya sea como requerimiento legal o como política interna de las agencias, y como ha cambiado el acceso a la información.<sup>1</sup>

En el periodo que siguió al 11 de septiembre, se dió una mayor preocupación por el uso de la información publicada por el gobierno por parte de terroristas y con el fin de causar daños posteriores y perjudicar al país. Aquí van sólo algunos ejemplos de la información que ha sido retirada del acceso público, de acuerdo con el organismo de control OMBWatch.<sup>2</sup> El Departamento de Transporte ha recogido los mapas de las

---

<sup>1</sup>Los medios publicitarios y distribución o hacer información abiertamente disponible para el uso público detenida por el gobierno. Los medios publicitarios incluyen el programa federal depositario, edición directa de una agencia o un artículo impreso, o anunciado en el Internet.

<sup>2</sup>Ver OMB Watch at <http://ombwatch.org> para mayor información sobre esta organización y sus reportes sobre el acceso a información gubernamental después del 11 de septiembre.

líneas de combustibles por su vulnerabilidad a un ataque.<sup>3</sup> La Agencia de Protección Ambiental está limitando el contenido y acceso de sus bases de datos y requiriendo un protocolo de registro, para rastrear a los usuarios de esta información.<sup>4</sup> La Comisión Federal de Regulación de Energía ha recogido su información de instalaciones de energía de su sitio Web.<sup>5</sup>

No es únicamente en el Internet de donde se está recogiendo y restringiendo la información por las agencias gubernamentales. La United States Geological Survey solicitó se recogiera un CD-ROM enviado a las bibliotecas a través del Programa Federal de Bibliotecas Depositarias (Federal Depository Library Program, FDLP) administrado por la Oficina de Prensa del Gobierno (GPO)<sup>6</sup> La Administración de Archivos Nacionales y Registros ha negado el acceso a los materiales en su poder.<sup>7</sup>

El Programa Federal de Bibliotecas Depositarias analizó las implicaciones de retirar información gubernamental del acceso público el 15 de noviembre 2001, tema de *Administrative Notes*.<sup>8</sup> Los señalamientos del Supervisor de Documentos Francis J. Buckley, Jr. en la Junta del Consejo de Bibliotecas Depositarias, el 15 de octubre del 2001, recordaron a los bibliotecarios que la Oficina de Prensa del Gobierno, a través de la FDLP busca llevar a cabo los deberes legales de la distribución de la información gubernamental a la población de los Estados Unidos.<sup>9</sup> Le recordó a los bibliotecarios de documentos gubernamentales que “El propósito del Programa Federal de Bibliotecas Depositarias es encargarse de que las publicaciones Gubernamentales estén disponibles para el acceso gratuito al público en general, y el restringir tal acceso es una violación directa del Título 44 [del Código de Estados Unidos].”<sup>10</sup> Los asuntos de distribución y contenido de las publicaciones gubernamentales aún estaban siendo revisadas por las

---

<sup>3</sup>Office of Pipeline Safety, Department of Transportation at [http://www.npms.rspa.dot.gov/data/npms\\_data\\_down.htm](http://www.npms.rspa.dot.gov/data/npms_data_down.htm).

<sup>4</sup>OMB Watch, *Access to Government Information Post September 11<sup>th</sup>*, at <http://www.ombwatch.org/article/articleview/213/1/104/> and Environmental Protection Agency, *Envirofacts*, at [http://www.epa.gov/enviro/html/ef\\_access.htm](http://www.epa.gov/enviro/html/ef_access.htm).

<sup>5</sup>David P. Boegers, Statement of Policy of Previously Published Documents, Federal Energy Regulatory Commission 97 FERC 61,030 (Oct. 11, 2001) at <http://cips.ferc.fed.us/Q/CIPS/MISC/PL/PL02-1.000.TXT>.

<sup>6</sup>Ariana Eunjung Cha, *Risk Prompt U.S. to Limit Access to Data: Security, Rights Advocates Clash Over Need to Know*, WASHINGTON POST, Feb. 24, 2002 at A01.

<sup>7</sup>National Archives and Records Administration, *Access to Archival Materials in the Context of Concern about Terrorism*, at [http://www.nara.gov/research/access\\_factsheet.html](http://www.nara.gov/research/access_factsheet.html).

<sup>8</sup>Federal Depository Library Program Government Printing Office, ADMINISTRATIVE NOTES, Nov. 15, 2001. Available at [http://www.access.gpo.gov/su\\_docs/fdlp/pubs/adnotes/ad111501.html](http://www.access.gpo.gov/su_docs/fdlp/pubs/adnotes/ad111501.html).

<sup>9</sup>Francis J. Buckley, Jr., *Developments in the FDLP: Remarks by Francis J. Buckley, Jr., Superintendent of Documents*. ADMINISTRATIVE NOTES, Nov. 15, 2001, at 6.

<sup>10</sup>*Ibid.* Section 1902 of Title 44 of the United States Code reads:

Las publicaciones Gubernamentales , excepto aquellas determinadas por sus componentes de edición que serían utilizados para fin oficial o estrictamente administrativos o con una finalidad operativa lo cual no tiene interés general o valor educativo y las publicaciones clasificadas para seguridad nacional, estarán disponibles en la biblioteca Depositaria por medio del Supervisor de Documentos de información al público.

agencias publicitarias en el momento de la junta del consejo. Buckley recordó a los bibliotecarios que existen documentos que han sido previamente solicitados para recogerse de las bibliotecas depositarias, en promedio han surgido un par de esas solicitudes cada año en las últimas décadas.<sup>11</sup> Los procedimientos para recoger un documento de una colección, el cual haya sido recibido por medio del programa, sólo se podrá realizar con el permiso del Impresor Público, el Supervisor de Documentos o sus agentes. La agencia editora podrá ordenar que una publicación sea recogida, pero solo deberán seguirse las indicaciones de la GPO y de sus oficiales en lo que concierne a los materiales en depósito.<sup>12</sup>

Probablemente el más asombroso cambio en la postura de los oficiales de gobierno fue del Ministro de Justicia, John Ashcroft, en sus indicaciones a los jefes de todas las agencias y departamentos gubernamentales. En un memorándum pidió a los oficiales federales el resistirse a cualquier petición de información hecha bajo los procedimientos FOIA.<sup>13</sup> Si alguna agencia negara una petición de información, declaró “Tengan la seguridad que el Departamento de Justicia defenderá su decisión a menos que ésta carezca de un sustento legal o presente el riesgo de un impacto adverso en la capacidad de otras agencias para proteger otros registros importantes.”<sup>14</sup> Señaló la excepción dada a los consejos confidenciales y asesoría dados por los abogados en las FOIA como una razón para negarse a facilitar la información.<sup>15</sup> Los seguidores de las FOIA calificaron la decisión de Ashcroft como no democrática. En el programa de Transmisión Pública *Now*, Jane Kirkley, Profesor de Ética y Leyes de los Medios en la Universidad de Minnesota, declaró lo siguiente sobre Ashcroft,

Lo que él está diciendo es que las deliberaciones de las agencias, la información que obtienen e intercambian, el total, la forma en como hemos conseguido llegar a nuestra política gubernamental no será algo siempre disponible al público. Esta no es una democracia desde mi punto de vista. Podrá ser una forma eficiente de operar del gobierno, pero no creo que se le pueda llamar democracia.<sup>16</sup>

En Canadá, el gobierno federal tiene su propio debate en cuanto a la información gubernamental en vista de los ataques terroristas. La respuesta de Canadá al 11 de septiembre fue la Ley Anti-Terrorismo del 2001, la cual recibió la aprobación real el 18 de diciembre 2001.<sup>17</sup> La ley tiene al menos tres aspectos sobre la política de información gubernamental. Primeramente, el Procurador General dispondrá de mayores facultades para expedir certificados que prohíban la revelación de información gubernamental en

---

<sup>11</sup>Id.

<sup>12</sup>Id. Buckley diseña el procedimiento para remover una publicación en sus declaraciones al Consejo de Bibliotecas depositarias.

<sup>13</sup>Memorandum de John Ashcroft, United States Attorney General, a los jefes de todas las agencias y departamentos federales. (Oct. 12, 2001), at <http://www.usdoj.gov/foiapost/2001foiapost19.htm>.

<sup>14</sup>Id.

<sup>15</sup>Id.

<sup>16</sup>Jane Kirkley, *Remarks on Secret Government*, NOW WITH BILL MOYERS, (April 5, 2002) (transcrito en [http://www.pbs.org/now/transcript/transcript\\_secretgov.html](http://www.pbs.org/now/transcript/transcript_secretgov.html)).

<sup>17</sup>Anti-Terrorism Act, S.C. ch. 41 (2001) (Can.). Disponible en [http://www.parl.gc.ca/37/1/parlbus/chambus/house/bills/government/C-36/C-36\\_4/C-36\\_cover-E.html](http://www.parl.gc.ca/37/1/parlbus/chambus/house/bills/government/C-36/C-36_4/C-36_cover-E.html).

procesos, bajo la Ley de Pruebas Canadienses.<sup>18</sup> Segundo, limitaciones en discursos en medios masivos de comunicación en contra de “la divulgación de mensajes de odio.”<sup>19</sup> Tercero, aumento de facultades para el cumplimiento de leyes para el monitoreo de registros de telecomunicaciones y empresas con actividades sospechosas.<sup>20</sup> Ahora analizaremos los primero dos puntos mientras que el último será discutido en la próxima sección de este documento.

El 15 de octubre del 2001 el gobierno de Canadá introdujo el proyecto de ley C-36 en la Cámara de los Comunes. El 19 de octubre del 2001 George Radwanski, el comisionado de privacidad de Canadá informó que este proyecto de ley “llevará a generalizar la restricción del acceso a la información gubernamental.”<sup>21</sup> Señaló que los condiciones previstas dentro del proyecto de ley respecto a las certificaciones del Ministro General pondrán “A las agencias y departamentos federales... completamente fuera del alcance de la ley de privacidad. Donde se otorgue una certificación, la ley de privacidad no se aplicará en absoluto.”<sup>22</sup> Una vez aprobada la propuesta de ley Val Werier publicó en *Winnipeg Free Press*, “En una respuesta exagerada al 11 de septiembre, ahora el gobierno podrá salirse con la suya contra cualquier crítica independiente, apelando a la nueva ley antiterrorista. No existirá más el escrutinio independiente para determinar si se justifican las restricciones de acceso a los archivos del gobierno.”<sup>23</sup> Existe la preocupación de que el Procurador General electo abusará de esta nueva política, restringiendo la revisión independiente de las demandas de información revelada por comisionados de privacidad o las cortes. La Asociación Canadiense de Periodismo (CAJ) declaró que, “La nueva legislación antiterrorista del gobierno federal es un paso muy severo, el cual limita gravemente el acceso a la información gubernamental.”<sup>24</sup> El presidente de la CAJ declaró, “Los Ciudadanos utilizan la Ley de Acceso a la Información rutinariamente y cualquier persona a quien le importe el gobierno o como somos gobernados deberá estar preocupado.”<sup>25</sup>

---

<sup>18</sup>Department of Justice, *Amendments to the Anti-Terrorism Act*, at [http://canada.justice.gc.ca/en/news/nr/2001/doc\\_27904.html](http://canada.justice.gc.ca/en/news/nr/2001/doc_27904.html).

<sup>19</sup>Department of Justice, *Anti-Terrorism Act Receives Royal Assent*, en [http://canada.justice.gc.ca/en/news/nr/2001/doc\\_28215.html](http://canada.justice.gc.ca/en/news/nr/2001/doc_28215.html).

<sup>20</sup>Id.

<sup>21</sup>*Canada's Privacy Commissioner says Act Would Deny Access to Information*, CANADIAN PRESS, Oct. 19, 2001 at 2001 WL 29536639.

<sup>22</sup>Id.

<sup>23</sup>Val Werier, *Focus: Open Government Shuts Down*, WINNIPEG FREE PRESS, Jan. 10, 2002, at A12.

<sup>24</sup>Erik Denison, *Anti-terrorism legislation too restrictive: CAJ*, CBC NEWS, Oct 29, 2001. Disponible en [http://vancouver.cbc.ca/template/servlet/View?zone=Vancouver&filename=bc\\_caj011029](http://vancouver.cbc.ca/template/servlet/View?zone=Vancouver&filename=bc_caj011029).

<sup>25</sup>Id.

En Escocia, el asunto del acceso a información gubernamental fue debatido cuando el Parlamento Escocés, analizó la Ley de Libertad de Información de esa nación (Escocia) la cual fue aprobada el 17 de enero del 2002.<sup>26</sup> El derecho de que la gente tenga acceso a la información del gobierno fue garantizado; más sin embargo hubo debate sobre las limitaciones de este derecho. El Partido Nacional Escocés expresó su preocupación sobre las excepciones, vetos ministeriales y el costo de acceder a la información.<sup>27</sup> Lo que impacta al tema de este documento es el uso de los vetos ministeriales. ¿Podrán los ministros utilizar el temor al terrorismo para no compartir la información?

La Campaña de Libertad de Información (Campaign for Freedom of Information, CFOI) tomó este asunto en diciembre del 2001 con su “Veto Ministerial del Extranjero: Evidencia posterior del Comité de Justicia 1 de la Ley de Libertad de Información (Escocia).”<sup>28</sup> Se menciona la nueva enmienda de Canadá, que permite el veto en asuntos de seguridad.<sup>29</sup> La CFOI siente que no será necesario ningún veto ministerial dado que otros estados democráticos no han incluido tal tema en sus FOIAs.<sup>30</sup> La Campaña siente que los ministros de gobierno no deberían tener autoridad irrestricta para vetar el acceso a la información. La CFOI no permitirá vetos en relación a la formación de políticas, el peso de la prueba lo deberán soportar los ministros para comprobar que existe la necesidad de no revelar, y el costo de las revisiones judiciales de los certificados de vetos ministeriales deberán ser absorbidos por el gasto público.<sup>31</sup> Las FOIA escocesas son consideradas como el modelo a seguir por el resto de la Gran Bretaña, a pesar de los problemas mencionados por sus detractores.<sup>32</sup>

Los gobiernos también están buscando la forma de prevenir la distribución de información privada respecto a la seguridad y protección de las minorías de población. El gobierno canadiense mandó cerrar la página Web [www.overthrow.com](http://www.overthrow.com) bajo petición del gobierno de Estados Unidos, ya que la misma describía de una forma no muy específica, la sedición, el odio y el terrorismo.<sup>33</sup> El gobierno británico reportó la baja del sitio de Internet de Sakina Securities por su alto contenido de información sobre la elaboración de bombas para jóvenes musulmanes.<sup>34</sup> Otro sitio de internet fue también dado de baja por

---

<sup>26</sup>BBC News, *MSPs vote in favour of information bill*, Jan. 17, 2002 at <http://news.bbc.uk/1/hi/english/uk/scotland/newsvid-17650000/1765101.stm>.

<sup>27</sup>Id.

<sup>28</sup>The Campaign for Freedom of Information, *The Ministerial Veto Overseas: Further evidence to the Justice 1 Committee on the Freedom of Information (Scotland) Bill*, disponible en <http://www.cfoi.org.uk/vetopaper.pdf>.

<sup>29</sup>Id. at 1.

<sup>30</sup>Id. at 7.

<sup>31</sup>Id. at 7-8.

<sup>32</sup>BBC News, *MSPs vote in favour of information bill*, Jan. 17, 2002 at <http://news.bbc.uk/1/hi/english/uk/scotland/newsvid-17650000/1765101.stm>.

<sup>33</sup>Bill White, *Canadian Feds Shut Down Overthrow.com*, INDEPENDENT MEDIA CENTER-WEBCAST NEWS, Nov. 9, 2001 at [http://www.indymedia.org/front.php3?article\\_id=86499&group=webcast](http://www.indymedia.org/front.php3?article_id=86499&group=webcast)

<sup>34</sup>Reuteurs, *Britain Closes Extremist Site*, WIRED NEWS, Oct. 4, 2001, at [p://www.wired.com/news/print/0,1294,47307,00.html](http://www.wired.com/news/print/0,1294,47307,00.html).

sus ligas de conexión con publicaciones del Azzam, que instaban a respaldar a musulmanes y pedían donativos para el Talibán.<sup>35</sup> La Electronic Frontier Foundation considera que la postura de muchos gobiernos está provocando el más grande reto hasta hoy presentado en cuanto a la libertad de expresión y a su inherente derecho de acceso a la información, ya sea provista por el gobierno o por partes privadas.<sup>36</sup> Las fuerzas militares de los Estados Unidos tomaron sus propias medidas preventivas para negar el acceso a la información pública proveniente de fuentes privadas relacionadas con la lucha contra el terrorismo. Tomó el inusual paso de comprar todas las imágenes de Afganistán tomadas por el satélite privado *Ikonos*, en lugar de imponer su autoridad como medio de control sobre los sistemas de imágenes satelitales. La adquisición de estas imágenes permite al gobierno evitar cualquier uso de las mismas, como las que revelan la localización de las fuerzas militares, al mismo tiempo que evita el surgimiento de argumentos sobre la libertad de expresión basados en la constitución.<sup>37</sup>

Los argumentos en contra de la restricción de la información gubernamental provienen de un amplio espectro de individuos y organizaciones. Jeremiah D. Baumann Defensor de Salud Ambiental del Grupo de Investigación para el Interés Público de los Estados Unidos, hizo una declaración en contra de algunas restricciones impuestas sobre el acceso a información gubernamental ante el Comité de Transporte e infraestructura de la Casa de Representantes de los Estados Unidos el 8 de noviembre de 2001.<sup>38</sup> El argumenta que aunque el gobierno debe estar tomando las medidas para proteger la información gubernamental del uso de terroristas, no debe hacerlo a costa de la pérdida de protección del público en general. Su preocupación se refiere a la discontinuación de publicaciones sobre el almacenamiento de químicos en la página de Internet de la Agencia para la Protección Ambiental. El público ya no puede informarse por sí mismo sobre los posibles peligros en su comunidad. La restricción de la información dificulta a las comunidades locales el prepararse para casos de emergencia, incluyendo ataques terroristas. La restricción también afecta la revisión de la industria, permitiendo que escape del escrutinio público. Baumann cree que las bases para excluir la publicación de información que ya están consideradas en las leyes sobre la libertad de acceso a la información proporcionan protección suficiente para la seguridad del público.

Baumann propone tres factores para determinar la retención de la información. Primero, ¿en qué beneficia al público el hacer disponible la información en cuestión?

---

<sup>35</sup> Johnson Hor, *Chilling Effects of Anti-Terrorism: "National Security" Toll on Freedom of Expression*, ELECTRONIC FRONTIER FOUNDATION at [http://www EFF.org/Privacy/Surveillance/Terrorism\\_militias/antiterrorism\\_chill.html#websiteshutdownothergov](http://www EFF.org/Privacy/Surveillance/Terrorism_militias/antiterrorism_chill.html#websiteshutdownothergov).

<sup>36</sup> Id.

<sup>37</sup> Duncan Campbell, *US Buys Up All Satellite War Images*, GUARDIAN, Oct. 17, 2001 en <http://www.guardian.co.uk/waronterror/story/0,1361,575594,00.html>.

<sup>38</sup> Jeremiah D. Baumann, *Right to Know Details of Chemical Supplies*, CONGRESSIONAL TESTIMONY BY FEDERAL DOCUMENT CLEARING HOUSE, Nov. 8, 2001, 2001 WL 26187661.

Segundo, ¿qué tipo de información está siendo retenida, que sea bastante general como para advertir al público y que a la vez no sea lo suficientemente específica para ayudar a los terroristas? Tercero, ¿cuál es la disponibilidad de la información de otras fuentes?<sup>39</sup>

### El papel de los bibliotecarios

Cuando Joy Suh, bibliotecaria encargada de los documentos de gobierno en la Universidad George Mason, recibió una carta en la cuál se le indicaba que destruyera un CD-ROM que contenía información detallada sobre los recursos hidráulicos del país, ella cumplió sin dudar, pero ahora le preocupa que esta acción represente el principio de el “periodo de secretos más grande en la sociedad americana.”<sup>40</sup> Suh expresó: “Consideré ambas posturas en mi mente. Veo el aspecto gubernamental. Pero también veo que los investigadores y el público podrían necesitar esta información.”<sup>41</sup> Este es el dilema que enfrentan todos los bibliotecarios. Lidian con los cambios en las políticas de información gubernamental desde las dos perspectivas. Buscan proporcionar el total acceso a la información a los usuarios y a la vez proteger la privacidad de los mismos de la intromisión del gobierno.

Para los bibliotecarios de los Estados Unidos existe preocupación de que la USA Patriot Act signifique la intromisión con respecto a la información confidencial de los registros de usuarios y los de los recursos bibliotecarios que utilizan. Miriam Nisbet, consejera legislativa de la American Library Association, sostiene que esta ley confiere acción legal sobre el derecho de acceso a los registros administrativos, que pueden incluir los registros de los usuarios de las bibliotecas.<sup>42</sup> La práctica usual de las bibliotecas académicas de los Estados Unidos es destruir cualquier registro de préstamo o uso de cualquier material bibliotecario después de su devolución. En la Universidad de Cornell, Ross Atkinson, subdirector de las bibliotecas, considera problemática la conservación de los registros de los movimientos efectuados por los usuarios en cintas de respaldo hasta por 35 días. Estas son necesarias en caso de que se presenten fallas en las redes computacionales y el período de tiempo de conservación que precede a la destrucción de estas cintas no puede acortarse. Probablemente la mayor preocupación en relación con la privacidad son los registros bibliotecarios de usuarios con acceso a información electrónica de fuentes desde el exterior del campus. Estos registros podrían rastrear, incluso, qué información está siendo utilizada.<sup>43</sup> Atkinson expresa su preocupación de que esta ley conduzca a la sociedad estadounidense a un futuro Orweliano.<sup>44</sup>

---

<sup>39</sup> Id.

<sup>40</sup> Ariana Eunjung Cha, *Risk Prompt U.S. to Limit Access to Data: Security, Rights Advocates Clash Over Need to Know*, WASHINGTON POST, Feb. 24, 2002, at A01.

<sup>41</sup> Id.

<sup>42</sup> Scott Carlson y Andrea L. Foster, *Colleges Fear Anti-Terrorism Law Could Turn Them into Big Brother: Provisions about networks and library records raise privacy and academic-freedom issues*, CHRONICLE OF HIGHER EDUCATION, March 1, 2001, at A32

Durante la gestión de la enmienda antiterrorista, los representantes de la Asociación Americana de Bibliotecas de Derecho de la American Library Association y la Association of Research Libraries dirigieron en una carta abierta a los miembros del Congreso sus preocupaciones como bibliotecarios frente a las medidas que se están tomando.<sup>45</sup> Se adjuntó un memorándum titulado *Declaración de la comunidad bibliotecaria sobre las medidas antiterroristas propuestas*.<sup>46</sup> Las preocupaciones que afectan directamente a los bibliotecarios se relacionan con el uso creciente de registros manuscritos, de dispositivos de rastreo en las redes computacionales de las bibliotecas y el más fácil acceso a los registros administrativos, incluyendo los registros del servicio de circulación bibliotecario. Se sugirió que a las agencias de acción legal se les siga exigiendo el requisito formal de obtener una orden judicial para tener acceso a la información; así mismo, se pide que las búsquedas e intrusiones que se realicen se delimiten lo más posible.<sup>47</sup>

En Escocia, la Biblioteca Escocesa, el Consejo de Información y la Asociación Escocesa de Bibliotecas enviaron una misiva en respuesta al comunicado sobre Libertad de Información en Escocia, durante su fase consultiva.<sup>48</sup> Ambos, el Consejo y la Asociación, consideraron que la adopción de las FOIA escocesas constituye un paso adelante a favor de los derechos y necesidades del público de información disponible en las agencias gubernamentales. Esto se logró gracias a la ayuda de los usuarios en general y del reconocimiento que un comisionado en información para tener control sobre lo dispuesto por las FOIA y para asegurar que la completa revelación de la información sea efectuada de acuerdo con la ley y no por gestiones políticas.<sup>49</sup>

Los bibliotecarios deben ser cuidadosos y no celar en exceso o negar el acceso a la información a los usuarios. El FDLR recuerda a los bibliotecarios a cargo de la sección

---

<sup>43</sup> Id.

<sup>44</sup> Id.

<sup>45</sup> Carta de Mary Alice Baish, Associate Washington Affairs Representative, American Association of Law Libraries; Lynne Bradley, Director, Office of Government Relations, American Library Association; y Prudence S. Adler, Associate Executive Director, Association of Research Libraries, a los miembros del Congreso de los Estados Unidos 1 (Oct. 2, 2001) (disponible en <http://www.ala.org/washoff/terrorismletter.pdf>).

<sup>46</sup> Statement from the American Association of Law Libraries, American Library Association, and Association of Research Libraries, to the United States Congress (Oct. 2, 2001) (available at <http://www.ala.org/washoff/terrorism.pdf>).

<sup>47</sup> Id.

<sup>48</sup> Scottish Library and Information Council and Scottish Library Association, An Open Scotland: Freedom of Information: A Consultation: Response by Scottish Library and Information Council and Scottish Library Association, disponible en <http://www.slainte.org.uk/Slicpubs/FreedomInfopdf>.

<sup>49</sup> Id.

de documentos gubernamentales, que él es el único cuerpo legal que tiene autoridad para ordenar el retiro de documentos de las colecciones bibliotecarias. Este recordatorio se expidió después de que Mary Bennet, bibliotecaria a cargo de la colección de documentos gubernamentales de la State University of New York/Oswego, envió un mensaje por correo electrónico a sus colegas bibliotecarios, instándolos a retirar de las colecciones los documentos provenientes de la Comisión para Regulación Nuclear. Sólo la Oficina de Prensa del Gobierno de los Estados Unidos puede indicar a los bibliotecarios a cargo de las colecciones de documentos gubernamentales cuando se ha de negar el acceso de este tipo de documentos a los usuarios.<sup>50</sup>

## **Conclusión**

El impacto ocasionado en las políticas de información de los gobiernos por lo ocurrido el 11 de septiembre continúa y probablemente seguirá así en un futuro predecible. Existe el riesgo de proporcionar información valiosa a terroristas cuando los gobiernos comparten con el público en general los detalles sobre los recursos gubernamentales y los resultados de los estudios oficiales sobre un número ilimitado de asuntos. Sin embargo, los gobiernos democráticos no pueden suspender el acceso a la información o invadir la información privada de los usuarios sin atentar contra la libertad que cualquier gobierno democrático brinda al país. Los bibliotecarios y los profesionales de la información necesitan ir a la vanguardia en cuanto a la protección del acceso a la información pública y a la no revelación de información privada. Esta es la tarea que todo bibliotecario alrededor del mundo debe abrazar y cumplir hasta donde sea posible en sus bibliotecas, en las naciones y más allá de las propias fronteras.

---

<sup>50</sup> American Library Association, *GPO Turns Tables, Calls on Librarians Not to Restrict Access*, AMERICAN LIBRARIES: NEWS, March 4, 2002 at <http://www.ala.org/online/news/2002/020304.html>